



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-010-2017-00089-01 (O2-22-073)
Demandantes: CARLOS MARIO VARELA LEZCANO
BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL
Demandado: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Litis Pasiva: FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E.
Procedencia: JUZGADO DÉCIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No.219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022
Asunto: PRIMA E INCENTIVO DE ANTIGÜEDAD Y REAJUSTE PRESTACIONAL

En Medellín, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL, conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-010-2017-00089-01 (O2-22-073), promovido por **CARLOS MARIO VARELA LEZCANO Y BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL** contra el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA**, y en el que se integró el contradictorio con la **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E.**, con el fin de resolver los Recursos de Apelación impetrados los demandantes y la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E., respecto de la sentencia que finiquitó la primera instancia, proferida el 25 de febrero de 2022 por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “*Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones*”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

Los señores CARLOS MARIO VARELA LEZCANO y BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovieron demanda ordinaria laboral en contra del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, en orden a que se declare que ostentan la calidad de trabajadores oficiales, y no de empleados públicos, y que son acreedores de los beneficios contemplados en el Acta 1722 del 14 de febrero de 1977, expedida por la Junta Departamental de Rentas del Departamento de Antioquia; y en procura de obtener el reconocimiento y pago de la prima y el incentivo por antigüedad, el reajuste de las prestaciones sociales y los aportes para el Sistema de Seguridad Social, teniendo como factor salarial la prima y el incentivo por antigüedad, el reconocimiento de la indemnización moratoria por la consignación deficitaria de las cesantías, la indexación de las condenas, y las costas del proceso.

Como fundamento fáctico del *petitum* los señores CARLOS MARIO VARELA LEZCANO y BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL expusieron que se encuentran vinculados al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, desde el 22 de junio de 1993 y el 19 de diciembre de 1989, respectivamente, devengan la suma de \$1.940.073 y \$1.629.074, respectivamente, y desempeñan el cargo de operarios; que la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA fue creada mediante la Ordenanza Departamental No.38 de 1919, y fue adscrita a la Secretaria de Hacienda y Superintendencia de Rentas del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a través del Decreto 625 de 1968, y de consiguiente, la relación que vincula a las partes es de carácter legal y reglamentaria; y que la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA acredita todos los requisitos previstos en el artículo 85 de la Ley 489 de 1998, y en tal sentido, debe entenderse que la misma tiene la naturaleza jurídica de Empresa Industrial y Comercial del Estado, y que los demandantes realmente ostentan la calidad de trabajadores oficiales.

Aseveraron que la Junta Departamental de Rentas de Antioquia, mediante el Acta 1722 de 1977, la cual expidió con ocasión de las facultades otorgadas en las Ordenanzas Departamentales No.30 de 1947 y No.28 de 1949, y que no ha sido anulada por la Jurisdicción Ordinaria, concibió el reconocimiento de una prima de antigüedad para los empleados con 5, 10, 15, 20, y 25 años de servicios, concepto que fue reconocido hasta el año 2003, cuando se dejó de aplicar el Acta 1722 de 1977 bajo el argumento de que era contraria a lo dispuesto en el Decreto 1919 de 2002, desconociendo que la prima de antigüedad es un factor salarial y no una prestación social.

Adujeron que la Asamblea Departamental del Antioquia, mediante la Ordenanza No.32 de 1971, modificada por las Ordenanzas No.28 de 1977 y No.53 de 1979, creo un incentivo por antigüedad de 25 días de salario por cada año de trabajo, pagaderos en el mes de diciembre de cada anualidad, para todos los trabajadores departamentales, concepto que fue reconocido hasta el año 2015, cuando el Consejo de Estado declaró la nulidad de la Ordenanza No.02 de 2003 porque la Asamblea Departamental de Antioquia Carecía de competencia para crear emolumentos salariales en favor de los empleados públicos, reflexión que no debe extenderse a los trabajadores de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, siendo que los mismos, en realidad, ostentan la calidad de trabajadores oficiales.

Finalmente, arguyeron que la suspensión en el pago de los conceptos antes descritos es completamente arbitraria y contraría a la Ley, y que vulnera los derechos adquiridos de los accionantes, e irrespeta el principio de la confianza legítima.

1.1. Trámite de Primera Instancia

La demanda se admitió el 16 de febrero de 2017 (pág.246, doc.002, carp.01), y se notificó el 20 de febrero de 2017 a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (págs.251-252, doc.002, carp.01), y el 12 de julio de 2017 a la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (pág.253, doc.002, carp.01) y al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (pág.254, doc.002, carp.01).

El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA contestó el 03 de agosto de 2017 (págs.255-302, doc.002, carp.01), misma en la que admitió que los señores CARLOS MARIO VARELA LEZCANO y BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL se encuentran vinculados a la entidad territorial - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, desde el 22 de junio de 1993 y el 19 de diciembre de 1989, respectivamente, que devengan na asignación salarial de \$2.071.028 y \$1.739.037, respectivamente, que desempeñan los cargos de Operario Código 487 – Grado 2 de la dirección de logística, y de Operaria Código 487 – Grado 2 de la dirección de envasado y añejamiento, respectivamente, y que la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA fue creada mediante la Ordenanza Departamental No.38 de 1919, y fue adscrita a la Secretaria de Hacienda y Superintendencia de Rentas del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a través del Decreto 625 de 1968, que la Junta de Rentas Departamentales de Antioquia creó la prima de antigüedad, mediante el Acta 1722 de 1977, acto administrativo no ha sido derogado por la jurisdicción contenciosa, que el pago de dicho emolumento fue suspendido a partir del año 2003, que la Asamblea Departamental del Antioquia, mediante la Ordenanza No.32 de 1971, modificada por las Ordenanzas No.28 de

1977 y No.53 de 1979, creo un incentivo por antigüedad, y cuyo pago fue suspendido desde el año 2015, y que el Consejo de Estado declaró la nulidad de la Ordenanza Departamental No.02 de 2003.

Sostuvo que la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA es una dependencia adscrita al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, y no una Empresa Industrial y Comercial del Estado, que los demandantes tienen con la entidad territorial una relación de carácter legal y reglamentaria, en su calidad de empleados públicos inscritos en carrera administrativa, que los emolumentos consagrados en el Acta 1722 de 1977 solo fueron creados para los empleados de los Grado 4 del nivel administrativo y el Grado 4 del nivel operativo, quienes venían percibiendo de las prestaciones emanadas del Laudo Arbitral de 1974, anulado por la Corte Suprema de Justicia, que en el Decreto 1919 de 2002 se estableció que los funcionarios del nivel territorial gozarían del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del poder público, que respecto de los trabajadores del nivel territorial solo constituyen salario los factores creados por las Asambleas Departamentales, hasta el año 1968, cuando se les derogó dicha facultad, o por el Gobierno Nacional, y que cesó el pago del incentivo por antigüedad en acatamiento de una decisión judicial en la que el Consejo de Estado le recordó que el establecimiento de los elementos propios del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos está reservado de manera exclusiva y concurrente al legislador y al Gobierno Nacional, decisión que tiene efectos erga omnes, por la falta de competencia de la Asamblea Departamental, y le resulta aplicable a los demandantes.

Aseveró que el reconocimiento y pago de la prima y el incentivo por antigüedad fue suspendido por encontrarse en una clara contraposición con las normas constitucionales, y de consiguiente, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, y propuso como excepciones de mérito las que denominó falta de jurisdicción, falta de competencia de la Junta de Rentas Departamental para crear factores salariales o prestaciones sociales, inexistencia del derecho, falta de causa para pedir, infracción de la constitución – excepción de inconstitucionalidad, incenscindibilidad de la norma e inexistencia del derecho, pérdida de ejecutoria del Acta 1722 de 1977, inexistencia de la obligación, pago de la prima e incentivo por antigüedad hasta el año 2014, falta de agotamiento de la reclamación administrativa e improcedencia de la sanción moratoria, y prescripción.

Por otra parte, se advierte que el 09 de agosto de 2021 (doc.009, carp.01) se integró el contradictorio con la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E., entidad que fue notificada el 23 de agosto de 2021 (doc.010, carp.01), y que presentó contestación el 10

de septiembre del mismo año (doc.011, carp.01), escrito en el que admitió que los señores CARLOS MARIO VARELA LEZCANO y BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL iniciaron labores el 22 de junio de 1993 y el 19 de diciembre de 1989, respectivamente, al servicio de la extinta Unidad Administrativa - Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia de la Secretaría de Hacienda del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, que ostentaron la calidad de empleados públicos del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, hasta el 31 de diciembre de 2020, y que fueron vinculados a la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E., a partir del 01 de enero de 2021, en calidad de trabajadores oficiales, sin solución de continuidad, para desempeñar el cargo de operarios, devengando un salario de \$2.486.350 y \$2.087.782, respectivamente.

También admitió que en el año 2021 suscribió sendas Convenciones Colectivas de Trabajo con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS, FERMENTADAS Y ESPUMOSAS – SINTRABECOLICAS, y con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS LICORERAS, FÁBRICAS E INDUSTRIAS DE LICORES DE COLOMBIA – SINALTRALIC, que en una y otra convención se pactó el reconocimiento de una prima de antigüedad, por cada quinquenio, equivalente a 2 días de salario al cumplir 5 años de servicio, 4 días de salario al cumplir 10 años de servicio, 6 días de salario al cumplir 15 años de servicio, 8 días de salario al cumplir 20 años de servicio, 10 días de salario al cumplir 25 años de servicio, 12 días de salario al cumplir 30 años de servicio, 14 días de salario al cumplir 35 años de servicio, y 16 días de salario al cumplir 40 años de servicio, que se pagan en el mes siguiente al cumplimiento de cada quinquenio, que los señores CARLOS MARIO VARELA LEZCANO y BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL están afiliados al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS LICORERAS, FÁBRICAS E INDUSTRIAS DE LICORES DE COLOMBIA – SINALTRALIC, desde agosto de 2012 y desde abril de 1993, respectivamente

Sostuvo que FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E. inició operación el 01 de enero de 2021, que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA continúa siendo responsable de pasivo pensional y prestacional causado hasta el 31 de diciembre de 2020, en favor de antiguos los trabajadores de la extinta Unidad Administrativa - FÁBRICA de Licores y Alcoholes de Antioquia adscrita a la Secretaría de Hacienda de la entidad territorial, y que según lo pactado en la convención colectiva de la que se benefician los demandantes, no es procedente el reconocimiento simultaneo de los beneficios en ella consagrados, con los beneficios contemplados en leyes, ordenanzas, pactos, convenciones o cualquier otro acto administrativo. Consecuentemente se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, y excepcionó de fondo la inexistencia de la obligación en cabeza de la Fábrica

de Licores y Alcoholes de Antioquia E.I.C.E., falta de legitimación en la causa por pasiva, de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia E.I.C.E., y prescripción.

1.2. Sentencia de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 25 de febrero de 2022 (doc.016, carp.01) por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, sentencia en la que se declaró que los señores CARLOS MARIO VARELA LEZCANO y BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL, desde su vinculación a la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E., han ostentado la calidad de trabajadores oficiales; se condenó a la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E. a reconocer y pagar en favor de los demandantes, la prima de antigüedad prevista en el Acta 1722 de 1977 y la Ordenanza Departamental No.19 de 2020, que por 25 años de servicio se causó en el año 2014 en favor de la señora BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL, y en el año 2018 en favor del señor CARLOS MARIO VARELA LEZCANO; se declaró probada la excepción de prescripción de las primas de antigüedad causadas en favor de BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL, con anterioridad al 19 de agosto de 2013, y en favor de CARLOS MARIO VARELA LEZCANO, con anterioridad al 08 de agosto de 2013; se absolvió a la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E. de las demás pretensiones incoadas en su contra; se absolvió al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de todas las pretensiones incoadas en su contra; y se condenó en costas a la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E., en favor del demandante.

Para sustentar su decisión, la cognoscente de primer grado argumentó que aunque estructura de la Licorera de Antioquia está determinada como dependencia de la Gobernación, cuya misión es industrial y comercial, resulta ostensible la inadecuada definición formal de la entidad, ya que su actividad es el monopolio rentístico de licores, y por ende, su clasificación corresponde a la de una empresa industrial y comercial del estado, y de consiguiente, sus servidores deben ser considerados como trabajadores oficiales; que los demandantes realmente siempre prestaron sus servicios en favor de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA; que los actos administrativos, incluido el que consagra la prima por antigüedad deprecada, gozan de la presunción de legalidad hasta que no sean anulados por sentencia judicial; que la Ordenanza Departamental que creó el incentivo por antigüedad fue declarado nula por el Consejo de Estado; y que la prima de antigüedad no hace parte de aquellos conceptos que taxativamente el legislador estableció constituyen factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales ni para el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social.

1.3. Recurso de Apelación

Inconforme con la decisión antes descrita, el apoderado judicial de CARLOS MARIO VARELA LEZCANO y BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL (minuto 34:50, link audiencia, doc.016, carp.01), interpuso el recurso de apelación en procura de que se revoque parcialmente la sentencia de primer grado, y en su lugar, se ordene el pago del incentivo por antigüedad, y se reconozca el carácter de factor salarial de dicho concepto, y de la prima de antigüedad, arguyendo que a los trabajadores oficiales se les aplica el mismo régimen que los trabajadores del sector privado, que el Consejo de Estado solo declaró la nulidad del acto administrativo que el contempla incentivo por antigüedad únicamente respecto de los empleados públicos, que el referido incentivo había sido previamente reconocido mediante Laudo Arbitral, que el CST establece que todos los emolumentos percibidos por el trabajador y que retribuyen la prestación del servicio constituyen factor salarial, y que las entidades accionadas actuaron de mala fe en el reconocimiento de los derechos que le asistían a los demandantes.

Por su parte, la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E. (minuto 44:30, link audiencia, doc.016, carp.01), interpuso el recurso de alzada en orden a que se revoque la sentencia de primer grado, en cuanto ordenó el reconocimiento de la prima de antigüedad, bajo el argumento de que a la Asamblea Departamental de Antioquia no le asistía la facultad para ordenar el reconocimiento de la prima por antigüedad deprecada, y que la Ordenanza Departamental por la que se creó la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E. se estableció que el pasivo prestacional causado en favor de los trabajadores de la Unidad Administrativa - Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, adscrita a la Secretaría de Hacienda del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA hasta el 31 de diciembre de 2020, se encuentra a cargo de la entidad territorial, siendo entonces aquella la responsable del reconocimiento y pago de las acreencias laborales que se hubieren causado en favor de los demandantes. Subsidiariamente, solicitó se autorice a la entidad, generar cuenta cobro a cargo del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, respecto de las acreencias causadas previo a su creación.

1.4. Trámite de Segunda Instancia

Los recursos de apelación se admitieron el 07 de marzo de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 14 del mismo mes y año (doc.03, carp.02), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, presentaran alegatos de conclusión por escrito.

El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA alegó el 30 de marzo de 2022 (doc.04, carp.02), relievando que lo peticionado tiene fundamento en el Acta 1722 de 1977 y las Ordenanzas Departamentales No.53 de 1979, No.28 de 1977 y No.32 de 197, y que mediante el Acto Legislativo 01 de 1968 se despojó a las Asambleas Departamentales de la facultad de fijar los elementos propios del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, la cual, fue reservada de manera exclusiva y concurrente en el legislador y al Gobierno Nacional, restricción que igualmente se contempló en la Constitución de 1991, literal e) del numeral 19 del artículo 150, por lo cual el reconocimiento y pago de las prima y el incentivo por antigüedad deprecados, es improcedente por inconstitucional.

Por su parte, los apoderados judiciales de CARLOS MARIO VARELA LEZCANO, BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL, y la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E. no presentaron alegaciones finales.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por de CARLOS MARIO VARELA LEZCANO, BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL, y la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E., advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problemas Jurídicos

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae en dilucidar si los señores CARLOS MARIO VARELA LEZCANO y BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL, mientras estuvieron vinculados a la Unidad Administrativa - Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, adscrita a la Secretaría de Hacienda del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, realmente ostentaron la calidad de empleados públicos o trabajadores oficiales. Adicionalmente, la Sala se ocupará de definir si a los demandantes les asiste el derecho al reconocimiento y pago de la "prima de antigüedad", fijada por la Junta de Rentas Departamentales de Antioquia, en el Acta 1722 del 14 de febrero de 1977, y del "incentivo por antigüedad", concebida por la Asamblea Departamental de Antioquia, en las Ordenanzas No.31 de 1971, No.28 de 1977, y No.53 de 1979. Consecuencialmente, habrá que establecer, si con base en el reconocimiento de las primas e incentivos antes descritos, a los demandantes les asiste el derecho al reajuste de las prestaciones sociales, incluidas las cesantías y los intereses sobre las cesantías, y de los

aportes para el Sistema de Seguridad Social, y al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria por la consignación deficitaria de las cesantías.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala confirmará la sentencia de primer grado, en cuanto declaró que los demandantes realmente han ostentado la calidad de trabajadores oficiales, y no la de empleados públicos, teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA debía haberse clasificado como una Empresa Industrial y Comercial el Estado, cuyos servidores son, por regla general, trabajadores oficiales; pero la revocará en cuanto ordenó el reconocimiento de la prima de antigüedad prevista en el Acta 1722 del 24 de febrero 1997 de la Junta de Rentas Departamentales de Antioquia, siendo que la facultad que le fue delegada por la Asamblea Departamental de Antioquia a través de la Ordenanza No.30 del 13 de junio 1947, para crear emolumentos prestacionales o salariales, solo le asiste de forma concurrente, según mandato constitucional, al legislador y al Gobierno Nacional.

2.3. Solución de los Problemas Jurídicos Planteados

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le compete la aportación de las pruebas, y cuál es la consecuencia jurídica que se deriva del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, debe señalarse que no existe discusión sobre los siguientes hechos jurídicamente relevantes: que la Unidad Administrativa - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA fue creada mediante la Ordenanza Departamental No.38 del 1919, que fue adscrita a la Secretaría de Hacienda y Superintendencia de Rentas Departamentales de Antioquia a través del Decreto Departamental 625 de 1968 (págs.126-134, doc.002, carp.01), que la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E., adscrita a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, fue creada por la Asamblea Departamental de Antioquia, mediante la Ordenanza No.19 del 19 de noviembre de 2020 (doc.008, carp.01; págs.19-29, doc.011, carp.01), que los servidores públicos que laboraban al servicio de la Unidad Administrativa - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA fueron incorporados a la plata de cargos de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E., en calidad de trabajadores oficiales, sin solución de continuidad para efectos de la liquidación de prestaciones sociales e indemnizaciones, y respecto de los factores prestaciones y salariales que recibieron en la calidad de empleados públicos (artículo 17 de la Ordenanza Departamental No.19 del 19 de noviembre de 2020 (doc.008, carp.01; págs.19-29, doc.011, carp.01), y que los empleos asignados a la Unidad Administrativa - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA fueron suprimidos a través del Decreto Departamental 2020070003579 del 29 de diciembre de 2020 (págs.62-70, doc.011, carp.01).

Tampoco se controvierte que el señor CARLOS MARIO VARELA LEZCANO nació el 08 de diciembre de 1969 (pag.74, doc.002, carp.01) estuvo vinculado al servicio de la Unidad Administrativa - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA desde el 22 de junio de 1993 (pág.73, doc.002, carp.01), que desempeñaba el cargo de operario, adscrito a la dirección de logística de la subgerencia de producción, y devengó la suma de \$1.940.073 durante el año 2016, \$2.071.028 durante el año 2017, y \$2.402.270 durante el año 2020 (págs.68-69, 307-309 doc.002, carp.01; pag.57, doc.011, carp.01); que el 20 de mayo de 2016 solicitó el reconocimiento del incentivo por antigüedad (págs.41-45, doc.002, carp.01), y el 08 de agosto de 2016 el reconocimiento de la prima de antigüedad (págs.46-47, doc.002, carp.01), peticiones que fueron desestimadas el 30 de noviembre de 2016 (págs.48-64, doc.002, carp.01), y el 25 agosto de 2016 (págs.65-67, doc.002, carp.01), respectivamente; que para el 13 de septiembre de 2018 se le habían realizado anticipos de las cesantías por valor de \$62.158.929 (págs.597-599, doc.002, carp.01); y que, desde el 01 de enero de 2021, se encuentra vinculado a la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E., mediante contrato de trabajo a término indefinido, sin

solución de continuidad, desempeñando el cargo de operario, adscrito a la Dirección de Procesos, y devengado un salario de \$2.486.350 (pág.57, doc.011, carp.001).

En igual sentido, no se discute que la señora BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL nació el 15 de octubre de 1969 (pag.36, doc.002, carp.01) estuvo vinculada al servicio de la Unidad Administrativa - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA desde el 19 de diciembre de 1989 (pág.34, doc.002, carp.01), que desempeñaba el cargo de operaria, adscrita a la dirección de envasado y añejamiento, y devengó la suma de \$1.629.074 durante el año 2016, \$1.739.037 durante el año 2017, y \$2.017.180 durante el año 2020 (págs.35, 307-308, 310, doc.002, carp.01; pag.56, doc.011, carp.01); que el 19 de agosto de 2016 solicitó el reconocimiento de la prima de antigüedad (págs.12-13, doc.002, carp.01), y el 23 de mayo de 2016 el reconocimiento del incentivo por antigüedad (pág.14, doc.002, carp.01), peticiones que fueron desestimadas el 31 de agosto de 2016 (págs.15-17, doc.002, carp.01), y 30 de noviembre de 2016 (págs.18-33, doc.002, carp.01), respectivamente; que para el 13 de septiembre de 2018 se le habían realizado anticipos de las cesantías por valor de \$66.250.882 (págs.597-599, doc.002, carp.01); y que, desde el 01 de enero de 2021, se encuentra vinculada a la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E., mediante contrato de trabajo a término indefinido, sin solución de continuidad, desempeñando el cargo de operaria, adscrita a la Dirección de Envasado, y devengado un salario de \$2.087.782 (pág.56, doc.011, carp.001).

Adicionalmente se encuentra acreditado que a través de la Ordenanza No.32 del 01 de enero de 1971, la Asamblea Departamental de Antioquia, reconoció en favor de los trabajadores departamentales un incentivo por antigüedad que se hace efectivo al momento del disfrute de las vacaciones, equivalente a 6 días de salario, para quienes no superen los 5 años de servicio; 15 días de salario, para quienes tuvieran entre 5 y 10 años de servicio; y 21 días de salario, para quienes superen los 10 años de servicio (págs.139-141, 409-411 doc.002, carp.01); la cual fue modificada mediante la Ordenanza Departamental No.28 del 29 de noviembre 1977, en el sentido de reconocer el incentivo por antigüedad por valor de 8 días de salario para quienes no superen los 5 años de servicio; por valor de 18 días de salario para quienes tengan entre 5 y 10 años de servicio; y por valor de 28 días de salario para quienes superen los 10 años de servicio (págs.135-136, 412-413, doc.002, carp.01); la cual fue modificada a través de la Ordenanza Departamental No.02 del 11 de abril de 2003, reconociendo el incentivo por antigüedad por valor de 10 días de salario, para quienes tengan entre 5 y 10 años de servicio, y por valor de 20 días de salario, para quienes superen los 10 años de servicio (págs.137-138, 407-408, doc.002, carp.01), acto administrativo que fue declarado nulo por el Consejo de Estado, mediante la Sentencia 0456-2011 del 02 de octubre de 2014, arguyendo que "... la

Asamblea Departamental de Antioquia se arrogó la competencia para establecer factores salariales y prestaciones, lo que en vigencia de la Constitución política de 1991 le corresponde en forma exclusiva al legislador y al Presidente de la Pública" (págs.311-339, doc.002, carp.01), proveído al que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA le dio cumplimiento a través de la Resolución 201500095579 del 24 de marzo de 2015 (págs.340-342, doc.002, carp.01).

Así mismo, se encuentra acreditado que mediante de la Ordenanza No.30 del 13 de junio 1947, la Asamblea Departamental de Antioquia delegó en la Junta de Rentas Departamentales de Antioquia, la creación de emolumentos prestacionales o salariales, en beneficio de los servidores públicos adscritos a su jurisdicción (págs.203-206, 536-548 doc.002, carp.01); y que a través del Acta No.1722 del 24 de febrero de 1977, la Junta de Rentas Departamentales de Antioquia adoptó para todos los empleados del régimen departamental, entre otros emolumentos, una prima de antigüedad equivalente a \$300 por 5 años de servicio, \$500, por 10 años de servicio, \$700 por 15 años de servicio, 1.000 por 20 años de servicio y 1.500 por 25 años de servicio (págs.75-85, 389-406, doc.002, carp.01).

Finalmente, obra constancia de que la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E., suscribió sendas Convenciones Colectivas de Trabajo con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS, FERMENTADAS Y ESPUMOSAS – SINTRABECOLICAS el 15 de marzo de 2021 (págs.30-40, doc.011, carp.01), y el 13 de abril de 2021 con el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS LICORERAS, FÁBRICAS E INDUSTRIAS DE LICORES DE COLOMBIA – SINALTRALIC (págs.41-55, doc.011, carp.01), y que los señores CARLOS MARIO VARELA LEZCANO y BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL están afiliados a la organización sindical SINALTRALIC desde el 01 de agosto de 2012 (pág.60, doc.011, carp.01) y el 01 de abril de 1993 (pág.61, doc.011, carp.01), respectivamente.

2.3.1. Naturaleza jurídica de los trabajadores de la Unidad Administrativa - Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia adscrita a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia

La controversia planteada en relación a la naturaleza o calidad jurídica de los trabajadores al servicio de la FABRICA DE LICORES Y ACOHOLES DE ANTIOQUIA fue resuelta por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL4782-2018, oportunidad en la que la Corte aclaró que, si bien a la luz del artículo 287 superior, se reconoce la autonomía de las entidades territoriales para la gestión de sus intereses, también se advierte que esta debe ser ejercida dentro de los límites de la Constitución y la ley, por lo cual no es absoluta y, además, que la Ley 489 de 1998, constituye una pauta organizacional mínima que

cada entidad territorial debe cumplir. Así las cosas, se explicó que *“... a pesar de que la estructura de la Licorera de Antioquia está determinada como dependencia de la Gobernación, cuya misión es industrial y comercial, resulta ostensible la inadecuada definición formal de la entidad, ya que su actividad es el monopolio rentístico de licores, y por ende, su clasificación, de acuerdo con las reglas mínimas de la estructura de la administración pública, corresponde a la de una empresa industrial y comercial del estado conforme al artículo 85 de la Ley 489 de 1998”* (CSJ SL4782-2018, SL1937 de 2019, SL4461-2020, SL606-2021).

Entonces, lo que se evidenciaba era una indebida conceptualización de la FABRICA DE LICORES Y ACOHOLES DE ANTIOQUIA, puesto que en realidad no era una simple dependencia, tal y como lo precisó el Consejo de Estado en la Sentencia 05001-23-31-000-2006-93419-01 del 21 de junio de 2018, que declaró la nulidad de los actos administrativos que habían determinado que la referida entidad era una dependencia de la Gobernación, y en la que además se exhortó a la entidad, a realizar los trámites ante la Asamblea Departamental, para su debida clasificación, precisando que, en todo caso sus trabajadores debían ser considerados como trabajadores oficiales, decisión que valga destacar, en cuanto a sus efectos, indicó que eran *ex tunc* lo que afectó el nacimiento del acto anulado.

Sobre el particular, el órgano jurisdiccional de cierre precisó que *“... al no poder hacerse eco de las normas anuladas por el Consejo de Estado, ello implicaba, frente a la naturaleza jurídica del vínculo laboral del personal de la Licorera accionada, que «en concordancia con el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, sus servidores son por regla general trabajadores oficiales, salvo aquellos que ejerzan labores de dirección y confianza identificados expresamente como empleados públicos», y con sustento en las decisiones CSJ SL del 30-10-2012, radicado 45664 y CSJ SL9458-2015 se dejó sentado que no puede imponerse al juzgador que aplique una norma administrativa general que ha sido declarada nula”* (CSJ SL4782-2018, SL1937 de 2019, SL4461-2020, SL606-2021).

Puestas en esa dimensión las cosas, se da prevalencia a la realidad de la estructura y misión de la entidad demandada, para asumir que la FABRICA DE LICORES Y ACOHOLES DE ANTIOQUIA adoptaba la forma propia de una empresa industrial y comercial del departamento, por lo menos, en lo que al régimen de sus servidores importa, lo cual no es ajeno a la jurisprudencia del órgano jurisdiccional de cierre (CSJ SL del 14-12-1982, radicado 8253); y que la inadecuada caracterización de la empresa trajo como consecuencia negarle el derecho a los demandantes de beneficiarse de la convención colectiva de trabajo.

Trasladando los argumentos jurídicos y fácticos expuestos en la línea jurisprudencial antes aludida, y siendo que el inciso 2º del artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 determina que los servidores de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por regla general, son trabajadores oficiales, salvo aquellos que ejerzan labores catalogadas de manera expresa como empleados públicos, como son los que desempeñan cargos de dirección y confianza; se confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró que los señores CARLOS MARIO VARELA LEZCANO y BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL, quienes se desempeñaron como operarios de Unidad Administrativa - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA adscrita a la Secretaría de Hacienda del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, desde el 22 de junio de 1993 y el 19 de diciembre de 1989, respectivamente, realmente ostentaron la calidad de trabajadores oficiales, y no la de empleados públicos.

2.3.2. Competencia para fijar el régimen prestacional de los servidores públicos.

En lo que tiene que ver con la facultad o competencia para fijar el régimen prestacional de los servidores públicos, esta corporación advierte que de conformidad con lo indicado en el numeral 9º del artículo 76 de la Constitución Política de 1886, era función del Congreso, hacer las leyes, y entre otras, fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales; sin embargo, y de conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 03 de 1910, a las Asambleas Departamentales se les confirió la competencia de establecer directamente los salarios y prestaciones de los servidores públicos, facultad ratificada en la Ley 4ª de 1913, y el Acto Legislativo 01 de 1945, pero de la que de la que fueron despojadas a través de la reforma constitucional que se introdujo mediante el Acto Legislativo 01 de 1968.

Ahora bien, en el artículo 12 de la Ley 6ª de 1945, ya se había indicado que el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales sería fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley, y que, en consecuencia, no podrían las corporaciones públicas territoriales arrogarse ésta facultad; adicionalmente, se advierte que en los artículos 41 de la Ley 11 de 1986 y 291 del Decreto 1333 de 1986, se dispuso que el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos municipales, sería el que estableciera la ley; y finalmente se evidencia que según lo indicado en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política de 1991, corresponde al Congreso de la República, hacer las leyes, y por medio de ellas, dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública; presupuestos normativos de los que se infiere, sin

ninguna hesitación, que a partir de la reforma constitucional que se introdujo mediante el Acto Legislativo 01 de 1968, existe una competencia concurrente, entre las ramas legislativa y ejecutiva, para determinar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

Sobre este aspecto en particular, el órgano jurisdiccional de cierre, ha sostenido de vieja data que *"... para concluir que los Acuerdos Municipales creadores de las primas reclamadas, eran ineficaces, y no podían aplicarse, basta con citar numeral 3° de la Constitución Nacional de 1886, que instituyó como competencia del legislativo, la potestad exclusiva para regular lo relativo a las prestaciones y las pensiones de los servidores oficiales"* (CSJ SL del 23-03-2007, radicado 30230, SL del 04-07-2012, radicado 38837; criterio que coincide con el expuesto por el Consejo de Estado en las Sentencias 1313-2008 del 27-10-2008, y 0091-2012 del 12-04-2018, entre otras).

Consecuentemente, se colige que el reconocimiento y pago de la "prima de antigüedad", concebida por la Junta de Rentas Departamentales de Antioquia, en el Acta 1722 del 14 de febrero de 1977, y del "incentivo por antigüedad", creado por la Asamblea Departamental, en las Ordenanzas No.31 de 1971, No.28 de 1977, y No.53 de 1979, resulta a todas luces inconstitucional, toda vez que su creación se dio con posterioridad a la reforma introducida por el Acto Legislativo 01 de 1968, y a la promulgación de la Ley 11 de 1986 y el Decreto 1333 de 1986, en los que se dispuso que el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos municipales, sería el que estableciera la Ley, apartes normativos de los que se infiere que la Asamblea Departamental de Antioquia, realmente no se encontraba facultada para ordenar el reconocimiento de los referidos emolumentos.

Ello así, no obstante que la facultad otorgada por la Asamblea Departamental en Ordenanza 30 del 13 de junio de 1947 a la Junta de Rentas Departamentales de Antioquia, se dio en una época para la cual contaba con facultades constitucionales para la creación de emolumentos salariales y prestacionales en favor de los servidores públicos territoriales, esto es, antes del acto legislativo de 1968; la autoridad delegada apenas vino a hacer uso de esa potestad pasados 30 años del acto empoderador, según consta en el acta de creación del emolumento, Acta 1722 del 24 de febrero de 1977, momento para el cual quien la había autorizado había perdido tal potestad, es decir, que se dejó fenecer la autorización ante el decaimiento de las facultades del ente delegatario, pues a nadie le es dado entregar más potestades de las que es titular.

Sobre el particular, y desde el punto de vista del artículo 6° de la Constitución Política de 1991, se advierte que los funcionarios públicos son responsables ante las autoridades, por infringir la

Constitución y las Leyes, y por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones, norma que señala que la actuación estatal debe desenvolverse en el estricto marco prefigurado en la Constitución, las leyes y demás disposiciones, y que al mismo tiempo proscribe el desbordamiento de esos cauces; en consonancia con esa directriz, se tiene entonces que ninguna de las disposiciones que fijan las funciones de las Asambleas Departamentales, las autorizan para regular materias o expedir normativas como las que aquí son objeto de examen, constituyendo tal circunstancia una razón adicional para que no se les otorgue ninguna eficacia ni efecto vinculante. Así las cosas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, en cuanto ordenó el pago de la prima de antigüedad prevista en el Acta 1722 de 1977, y en su lugar, se absolverá tanto al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA como a la FABRICA DE LICORES Y ACOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E. del reconocimiento de dicho concepto.

Corolario de todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primer grado, en cuanto declaró que los demandantes realmente han ostentado la calidad de trabajadores oficiales, y no la de empleados públicos, teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOL DE ANTIOQUIA del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA debía haberse clasificado como una Empresa Industrial y Comercial el Estado, cuyos servidores son, por regla general, trabajadores oficiales; pero la revocará en cuanto ordenó el reconocimiento de la prima de antigüedad prevista en el Acta 1722 del 24 de febrero 1997 de la Junta de Rentas Departamentales de Antioquia, siendo que la facultad que le fue delegada por la Asamblea Departamental de Antioquia a través de la Ordenanza No.30 del 13 de junio 1947, para crear emolumentos prestacionales o salariales, solo le asiste de forma concurrente, según mandato constitucional, al legislador y al Gobierno Nacional.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, las costas de la segunda instancia estarán a cargo de los señores CARLOS MARIO VARELA LEZCANO y BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL, por habérseles resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto, y con arreglo a lo previsto en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho, a favor de cada una de las codemandadas, la suma de \$1.000.000 a prorrata, que corresponde a un (1) SMMLV, siendo el tope mínimo permitido (\$500.000 para cada una).

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

5. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR los numerales segundo y tercero de la sentencia proferida el 25 de febrero de 2022 por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por CARLOS MARIO VARELA LEZCANO y BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL contra el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, y en el que se integró el contradictorio con la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA E.I.C.E., y en su lugar, absolver a las entidades demandadas del reconocimiento y pago de la prima de antigüedad prevista en el Acta 1722 del 24 de febrero de 1977 de la Junta d Rentas Departamentales de Antioquia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de fecha y procedencia conocidas.

TERCERO: COSTAS en esta instancia a cargo de los señores CARLOS MARIO VARELA LEZCANO Y BIBIANA PATRICIA PÉREZ ÁNGEL, fijándose como agencias en derecho, a favor de cada una de las codemandadas, la suma de \$1.000.000, a prorrata (\$500.000 para cada una).

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, acogiendo el criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vertido en el auto AL-2550 del 23-06-2021, radicado 89.628, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Magistrada



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario